

República de Colombia



Tribunal Administrativo de Antioquia
SALA PRIMERA DE ORALIDAD.
Magistrado Ponente: **ÁLVARO CRUZ RIAÑO**

Medellín, ENERO VEINTIDÓS (22) DE DOS MIL TRECE (2013)

MEDIO DE CONTROL	REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE	SANDRA MILENA RODRÍGUEZ ESTRADA Y OTROS
DEMANDADO	ESE BELLOSALUD.
RADICADO	05001 23 33 000 2012 00709-00
INSTANCIA	PRIMERA
ASUNTO	REMITE POR COMPETENCIA
PROVIDENCIA	INTERLOCUTORIO 12

ANTECEDENTES

SANDRA MILENA RODRÍGUEZ ESTRADA, obrando en nombre propio y en representación de sus hijas menores: **LEIDY ESTEFANÍA GAVIRIA RODRÍGUEZ** y **YARA ALEJANDRA RODRÍGUEZ ESTRADA**; **MARÍA BERENICE ESTRADA MARULANDA**; **BEATRIZ HELENA ESTRADA MARULANDA** Y **MARÍA CECILIA ESTRADA MARULANDA**, presentaron demanda, ante esta instancia judicial, en ejercicio del medio de control de reparación directa con el fin de reclamar los perjuicios sufridos como consecuencia de la muerte de la Señora **LUZ NELLY ESTRADA MARULANDA**.

Estudiado el proceso de la referencia, concluye el Tribunal Contencioso Administrativo que carece de competencia por el factor cuantía para conocer del mismo, por las siguientes:

2. CONSIDERACIONES

2.1 La ley fija la competencia de los distintos Jueces y Tribunales de la República para las diversas clases de procesos, atendiendo, entre otros, al factor funcional, objetivo, subjetivo y territorial, esto es, a su naturaleza, a las pretensiones, a la calidad de las partes y al lugar donde debe ventilarse el proceso. Es así como la Ley 1437 de 2011 -CPACA- consagró la competencia de los Tribunales Administrativos de la siguiente manera:

ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por otro lado, y con el fin de determinar la competencia por razón cuantía de los asuntos sometidos a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 dispuso:

“Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor. En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.” (Subrayado fuera de texto).

De la norma antes citada, se deduce que la estimación de la cuantía para determinar la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo en procesos de reparación directa se establece de acuerdo con la pretensión mayor de la demanda, la cual debe superar los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y deben excluirse los perjuicios morales cuando éstos no sean los únicos que se pidan.

2.2. En el caso de la referencia, en folios 20 y 21, la apoderada de la parte actora señala que la cuantía del proceso es de 1070 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cifra que obtiene de la sumatoria de cada una de las pretensiones de la demanda. Sin embargo, como se anotó en líneas anteriores, el criterio que establece la norma para determinar la competencia, es el monto de la pretensión mayor, que, en este caso, equivale a 178, 3 SMLMV por cada demandante, o lo que es lo mismo, 101.061.500 pesos para cada uno de los peticionarios, a título de perjuicio moral.

A esta conclusión llega el Despacho, por cuanto, si bien en el cuadro expuesto en folios 16, se expresa el monto de cada pretensión en gramos oro y ésta debe

presentarse en SMLMV, se observa que la cantidad que se pide para cada uno de los demandantes es la misma, y que, en el acápite de la competencia se expresa un total en salarios mínimos que permite dividir dicha suma en 6, teniendo en cuenta el número de demandantes.

Con base en lo anterior, la pretensión mayor, equivale la suma de \$101.061.500 pesos, cuantía ésta que se tendrá en cuenta para determinar la competencia del proceso, teniendo claro que tal monto no supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior, torna necesaria la remisión del expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín, pues, es evidente que son ellos los competentes para conocer de este asunto.

Se impone por tanto, dar aplicación a lo normado por el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que prescribe:

“Artículo 168: En caso de falta de jurisdicción o de competencia mediante decisión motivada el juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible...”

En consecuencia, el Tribunal Administrativo carece de competencia para conocer de la presente acción de Reparación Directa y estima que los competentes para asumir el conocimiento de la demanda de la referencia son los Jueces Administrativos del Circuito Judicial Administrativo de Medellín.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA PRIMERA DE ORALIDAD,**

RESUELVE

1. Declarar la falta de competencia por el factor cuantía para conocer de la acción de reparación directa de la referencia, por los motivos antes señalados.
2. Por la Secretaría de la Corporación se dispone **REMITIR** el proceso de la referencia al Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos de Medellín para que sea sometido al correspondiente reparto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

5

**ALVARO CRUZ RIAÑO
MAGISTRADO PONENTE.**